EL MINISTRO DE JUSTICIA AMPLIA la referencia sobre normas electorales

El ministro de Justicia, don Landelino Lavilla, hizo a Televisión Española unas declaraciones, a última hora de ayer, de las que recogemos aquellos puntos que amplían o complementan el contenido de la referencia del Consejo de Ministros sobre las normas electorales.

● Son electores de conformidad con la ley y de acuerdo con lo que a tal efecto está establecido en la ley Básica para la Reforma Política, que fue aprobada en referéndum nacional en el mes de diciembre, todos los españoles mayores de veintiún años que estén inscritos en el censo.

● El sistema proporcional implica que la distribución de los diputados entre las distintas candidaturas concurrentes a las elecciones se verifica en proporción al número de votos obtenidos por cada una de las elecciones. Las normas electorales que han sido aprobadas hoy por el Consejo de Ministros suponen que las elecciones para el Congreso de Diputados se va a operar por el sistema de lista completa, cerrada y bloqueada. Verificadas las elecciones, computados los votos correspondientes a cada una de las candidaturas, la determinación consiguiente de los escaños que deben ser atribuidos a cada una de esas candidaturas se verifica por el sistema proporcional en proporción al número de votos obtenidos por cada candidatura, en la modalidad del sistema de la mayor media, que es el que refleja la conocida regla D'Hont.

● Cada una de las candidaturas tiene que contener un número de candidatos por lo menos igual al del número de escaños a cubrir en esa circunscripción electoral. La determinación de que son cerradas y bloqueadas implica que las opciones electorales lo son de lista completa, de manera que cada uno de los electores tiene posibilidad de votar entre las distintas listas que le son propuestas, sin posibilidad de realizar mezclas de candidatos que figuren en ellas, sino que, como digo, la opción es en bloque por la totalidad de la lista, y la adscripción subsiguiente de escaños que corresponda a esa lista se verifica en función del orden por el que cada partido proponente de esa candidatura ha establecido la relación de los distintos candidatos.

● El sistema es distinto en el Senado, en primer lugar, porque en el Senado el sistema de escrutinio es mayoritario, conforme a la ley Básica para la Reforma Política, y en segundo lugar porque ahí no se establece un sistema de votación por lista, sino que se prevén candidaturas individuales a

efectos de votación y de escrutinio, sin perjuicio de que cada uno de los partidos, federaciones o coaliciones que puedan comparecer a la contienda electoral puedan agrupar sus propios candidatos en una lista a efectos de esa presentación y a efectos de la campaña electoral consiguiente. La votación en el Senado la realiza cada uno de los electores, determinando los senadores que quiere elegir. A continuación se verifica el cómputo de votos de forma que salen elegidos aquellos que tienen mayor número de votos por un escrutinio estrictamente mayoritario.

● Los distritos electorales, en las normas electorales que han sido aprobadas hoy por el Gobierno, se corresponden en términos generales con las provincias.

CANDIDATURAS

● La presentación de candidaturas pueden hacerla los partidos y las federaciones; unos y otros, inscritos en el Registro específico de Asociaciones Políticas que a tal efecto está establecido en el Ministerio de la Gobernación. Pueden hacerla las coaliciones electorales, entendiéndose por tales a agrupaciones de partidos o de federaciones, con vistas precisamente a estas elecciones. La presentación de las coaliciones se verifica por un trámite muy simple y muy sencillo, que es la presentación de esas coaliciones en la Junta Central Electoral, y se admite también la posibilidad de que puedan ser presentadas candidaturas independientes por grupos de electores de cada circunscripción. Se establece que un número de electores, que sea del 1 por 1000 de los de la circunscripción, con un mínimo de 500, puedan promover ellos mismos candidaturas independientes.

● El decreto-ley contempla los dos supuestos de inelegibilidades e incompatibilidades. Las inelegibilidades suponen la determinación de aquellos supuestos que excluyen la posibilidad de que quien esté incurso en una determinada situación sea elegible. Las incompatibilidades contemplan más bien la situación de la posible simultaneidad en el desempeño de determinados cargos y la titularidad de la condición de diputado y de senador. Las inelegibilidades que ha establecido el Gobierno son, yo diría, que amplias y rigurosas en consideración a que se trata de unas normas electorales que han de regir estrictamente estas primeras elecciones, que obviamente se producen en unas circunstancias singulares.

Por ello, las causas de inelegibilidad comprenden, en términos generales, tanto a aquellos que están en situaciones institucionales o personales, que, lógicamente, deben mantenerse al margen de la contienda del partido; me estoy refiriendo, por ejemplo, a quienes están en activo en las Fuerzas Armadas o a quienes desempeñan cargos en la Administración de Justicia, como aquellas de sentido más estrictamente político y que afectan a quienes desempeñan altos cargos tanto en la Administración Central como en la Administración Local y en la Administración institucional y sindical. A este respecto, si puedo decirle que están declarados inelegibles los ministros del Gobierno.

● Las normas electorales prevén que el momento a partir del cual se verificará la calificación de inelegibilidad es el octavo día siguiente a la convocatoria de las elecciones, de manera que quienes hoy estén incurso en causa de inelegibilidad podrán, si cesan en ella, presentarse a las elecciones siempre que ese cese se produzca con anterioridad al octavo día siguiente a la convocatoria de las elecciones.

LA CAMPAÑA ELECTORAL

● Respecto de la campaña electoral, las previsiones establecidas son: primero, de duración de tres semanas, de manera que la campaña estricta, entendiéndose como tal el conjunto de actividades lícitas que los distintos partidos, fe-

deraciones, asociaciones, etc., desarrollen para requerir el voto a favor de sus candidatos de los distintos electores, se van a desarrollar en un plazo de tres semanas.

Se contempla en el proyecto de normas electorales hoy aprobadas todo lo relativo a la colocación de carteles, a cuyo efecto estaba previsto que las autoridades municipales, por los ayuntamientos, se facilitarían especiales lugares de colocación de estos carteles; se establece todo lo relativo a los actos electorales y la disponibilidad, a tal respecto, de locales públicos; todo lo que concierne a los medios de comunicación social de titularidad pública, a cuyo efecto se establecen los principios de igualdad de oportunidad oficial, si bien se establece que todo esto será objeto de desarrollo y articulación de un decreto posterior, aprobado por el Gobierno, previniéndose incluso la existencia de algún órgano de control con presencia de miembros propios de las distintas fuerzas políticas contendientes.

LAS SUBVENCIONES

● Las normas electorales aprobadas prevén un mecanismo de subvención, si bien es a posteriori y en función de los resultados electorales. Ahí nos hemos encontrado con un problema respecto de la forma de articular ese sistema de subvención. Sabe usted que es práctica habitual el hacerlo en otros países en función de los resultados de las elecciones precedentes, situación a la que no podemos acogernos nosotros en estos momentos. Por ello, y como se ha hecho en algunas experiencias recientes de algunos otros países, se opera en función de los resultados electorales y, por consiguiente, subvención a posteriori, en la que se van a articular dos criterios: el de la subvención en función de escaños obtenidos y en función de unos votos obtenidos para lograr precisamente esos escaños que cada una de las candidaturas haya obtenido. El problema fundamental que van a tener los distintos partidos, asociaciones y federaciones es el de conseguir algún tipo de prefinanciación con vistas a esa subvención. Las normas electorales, en alguna medida para establecer un procedimiento de enlace entre esa financiación esperable a posteriori y la que a priori se pueda obtener. Se piensa establecer que las instituciones financieras puedan contar con la determinación por parte de la candidatura de que la percepción en su día de las subvenciones se haga directamente por la institución financiera que hubiera anticipado fondos para financiar la campaña electoral.

● Las elecciones se van a desarrollar, yo creo, por lo menos así están concebidas, con absoluto rigor y garantía en cuanto a los distintos mecanismos y en cuanto a los distintos órganos que van a intervenir en el procedimiento electoral. Por una parte, las atribuciones propias de la administración electoral van a ser asumidas por una junta electoral central, juntas electorales provinciales y juntas de zona que son a nivel,

como me parece que le he dicho antes, de partido judicial. La composición de estas juntas tiene un alto grado de judicialidad en relación con sus precedentes, que son las actuales juntas del censo. De ellas se ha excluido a todos aquellos vocales que tienen en alguna u otra forma su posición dependiente de una libre designación del Gobierno, de manera que esas son la modificaciónes fundamentales con respecto a las conocidas juntas del censo: grado superior de judicialización y eliminación de vocales o miembros que tuvieran su cargo dependiente de una libre decisión del Gobierno. En la junta de más alto nivel, la Junta Central, se prevé la posibilidad de existencia de hasta cinco vocales eventuales, porque son para estas primeras elecciones, que serían designados en virtud de presentación que hicieran las fuerzas contendientes en el proceso electoral. En las juntas de zona habría representantes de los electores. En lo que concierne al procedimiento electoral, fundamentalmente votación y escrutinio, está previsto que cada una de las candidaturas puedan designar hasta dos interventores, que pueden sustituirse entre sí sin que más de uno pueda desempeñar simultáneamente el cargo.

Se prevé la existencia de apoderados de las candidaturas y, consiguientemente, creo que en estos términos está perfectamente garantizada la objetividad e imparcialidad de todo el aparato del Estado en lo que respecta al desarrollo de estas elecciones. Yo estoy convencido que las elecciones serán como Dios manda, que habrán de desenvolverse con absoluta normalidad y que el rigor y la honestidad con que el Gobierno las plantea darán de lado a cualesquiera recelos que puedan existir respecto de estas primeras elecciones, en las que somos plenamente conscientes de que nos estamos jugando la consolidación de un futuro que todos aspiramos a que sea el mejor futuro para los españoles.